

Septiembre 26 de 1951

35ª REUNION — 33ª SESION ORDINARIA

Presidencia del contraalmirante (R.) ALBERTO TEISAIRE,  
presidente provisional del Honorable Senado

Secretarios: señores ALBERTO H. REALES y SANTIAGO A. JOB

SENADORES PRESENTES:

AMELOTTI, Osvaldo  
ANTILLE, Armando G.  
AVENDAÑO, Arcadio B.  
BAVIO, Ernesto F.  
CRUZ, Luis  
DURAND, Alberto  
ENDEIZA, Víctor W.  
GIAVARINI, Alejandro Bautista  
GÓMEZ DEL JUNCO, Felipe  
GÓMEZ HENRÍQUEZ, Samuel  
LORENZÓN, Ricardo Octavio  
LUCO, Francisco R.  
MADARIAGA, Eduardo  
MATHUS HOYOS, Alejandro  
MENDIONDO, F. Daniel  
RAMELLA, Pablo A.  
ROLDÁN, Ramón Ángel  
SCATAMACCHIA, Mauricio Antonio  
SOLER, Lorenzo  
TANCO, Miguel A.  
TEISAIRE, Alberto  
ZERDA, Justiniano de la

AUSENTES, CON AVISO:

BASALDÚA, Juan Carlos  
LAZARO, Juan Fernando de  
MOLINARI, Diego Luis  
VIVIANI, Rinaldo

SUSPENDIDO:

SANCHEZ RECALDE, Luis N. A.

SUMARIO

1.—Asuntos entrados:

I.—Mensaje del Poder Ejecutivo con el que acompaña copia del decreto 28.430/50, por el que se fijan los recursos destinados a la financiación del plan de obras a desarrollar por el Consejo de Reconstrucción de la provincia de San Juan, en el ejercicio de 1950.

II.—Comunicaciones de la Honorable Cámara de Diputados.

III.—Comunicaciones de la Presidencia del Honorable Senado.

IV.—Peticiones particulares.

2.—Proyecto de ley del senador Cruz, por el que se autoriza la erección, por parte del Poder Ejecutivo, de un monumento que perpetúe la memoria de don Domingo Faustino Sarmiento, en la provincia de Tucumán.

3.—Proyecto de comunicación del senador Ramella, relativo al régimen cambiario para la exportación de libros argentinos.

4.—Proyecto de decreto del senador Madariaga, por el que se encomienda al escritor e historiador Dardo Corvalán Mendilaharsu, ad honórem, el memorial de los escudos de las provincias argentinas, de la Nación y de su Capital Federal. A moción del mismo senador se resuelve tratarlo sobre tablas.

## 5.—Asunto entrado:

## V.—Despachos de comisión.

- 6.—A moción del senador Giavarini, se fijan los asuntos a tratar en la sesión de la fecha.
- 7.—Consideración del despacho de la Comisión de Defensa Nacional en el proyecto de ley, en revisión, sobre modificaciones del artículo 1º de las leyes 13.024 y 13.251 (creación de becas para el Liceo Naval y militares). Se aprueba y queda convertido en ley.
- 8.—Consideración del despacho de la Comisión de Presupuesto y Hacienda en el proyecto de ley, en revisión, sobre mejoras otorgadas por el Poder Ejecutivo, según decreto 7.025/51 y sus complementarios. Se aprueba y queda convertido en ley.
- 9.—Consideración del despacho de la Comisión de Presupuesto y Hacienda en el proyecto de ley, en revisión, modificando leyes impositivas. Se aprueba y queda convertido en ley.
- 10.—Consideración del asunto a que se refiere el número 4 del sumario. Se aprueba.
- 11.—A moción del senador Cruz, se autoriza a la Presidencia a girar directamente a las respectivas comisiones los asuntos que tengan entrada durante la presente semana.
- 12.—Apéndice:

## I.—Sanciones del Honorable Senado.

## II.—Comunicaciones al Poder Ejecutivo.

—En Buenos Aires, a los veintiséis días del mes de septiembre de 1951, siendo las 17 y 15, dice el

Sr. Presidente (Teisaire). — La sesión está abierta.

## 1

## ASUNTOS ENTRADOS

Sr. Presidente (Teisaire). — Se va a dar cuenta de los asuntos entrados.

## I

Buenos Aires, 20 de septiembre de 1951.

Al Honorable Congreso de la Nación.

En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 120 de la ley 12.961, de contabilidad, el Poder Ejecutivo tiene el honor de dirigirse a vuestra honorabilidad,

remitiéndole copia legalizada del decreto 28.430/50, por el que se fijan en la suma de sesenta y ocho millones ciento setenta y tres mil quinientos cincuenta y seis pesos moneda nacional (\$ 68.173.556) los recursos destinados a la financiación del plan de obras a desarrollar por el Consejo de Reconstrucción de San Juan en el ejercicio de 1950.

Dios guarde a vuestra honorabilidad.

JUAN PERÓN.  
Angel G. Borlenghi.

Buenos Aires, 29 de diciembre de 1950.  
Año del Libertador General San Martín.

Visto el expediente 9.781/50, por el que el Consejo de Reconstrucción de San Juan solicita la distribución del plan de obras a desarrollar en el año 1950, y

## CONSIDERANDO:

Que la ley 13.558 fijó el monto total del plan de obras a ejecutar en el ejercicio 1950, cuya distribución debe efectuar el Poder Ejecutivo;

Que es indispensable reforzar la contribución a cargo del Estado, fijada en la suma de \$ 35.000.000 por ley 13.558, a efectos de atender las necesidades del ejercicio relativas a la reconstrucción de San Juan;

Que, asimismo, es necesario introducir modificaciones en el cálculo de recursos aprobado para dicho organismo por la citada ley 13.558, con el objeto de ajustarlo a las recaudaciones reales que se estima habrán de operarse en el transcurso del corriente año;

Que, a mérito de lo señalado, deben adecuarse las autorizaciones destinadas al plan de obras correspondientes al año 1950, de acuerdo con las necesidades de dicho ejercicio y los medios financieros previsibles;

Por todo ello y atento a las disposiciones de los artículos 18 de la ley 13.558 y 120 de la ley 12.961,

El presidente de la Nación Argentina

## DECRETA:

Artículo 1º — Fíjense en la suma de sesenta y ocho millones ciento setenta y tres mil quinientos cincuenta y seis pesos moneda nacional (\$ 68.173.556) los recursos destinados a la financiación del plan de obras a desarrollar por el Consejo de Reconstrucción de San Juan en el ejercicio de 1950, de acuerdo con el detalle que figura en la planilla anexa.

Art. 2º — Distribúyese el crédito total fijado para el plan de obras a financiarse con los recursos a que se refiere el artículo 1º del presente decreto, en la forma que se indica en las planillas anexas, de cuyo total, un millón seiscientos cincuenta y tres mil trescientos ocho pesos moneda nacional (\$ 1.653.308) corresponden a «Gastos en personal» y sesenta y seis millones quinientos veinte mil doscientos cuarenta y ocho pesos moneda nacional (\$ 66.520.248) a «Otros gastos».

Art. 3º — Ampliase hasta la suma de sesenta y ocho millones ciento setenta y tres mil quinientos cincuenta y seis pesos moneda nacional (\$ 68.173.556) el plan integral de trabajos públicos correspondientes al anexo 3 - Ministerio del Interior - Consejo de Reconstrucción de San Juan - Planillas III, ley 13.558 y VIII, ley 12.865, fijado por el decreto 6.004/50, de fecha 21

Como puede verse, señor presidente, al dictar el Poder Ejecutivo esta medida no ha hecho más que atender a una necesidad imperiosa de carácter estrictamente necesario para el normal desenvolvimiento de los servicios a su cargo y para lo cual ya se hallaba debidamente facultado por el Congreso Nacional en el articulado de la ley de presupuesto para los años 1951 y 1952; pero por tratarse de una medida de significativa importancia desde el punto de vista económico y social, y que toca al aspecto financiero en la ejecución de la ley de gastos y recursos de la administración nacional, la autorización en su alcance debe aún ir más allá, extendiéndola a las nuevas economías que el propio Poder Ejecutivo se impuso para dar cumplimiento a la medida.

Por eso el Poder Legislativo no puede permanecer ajeno a un acto de tal trascendencia, siendo como es la rama del poder que por delegación del pueblo y mandato constitucional fija el presupuesto de gastos de la Nación.

Y por último, no deseo finalizar este informe sin antes recalcar especialmente el significado político que implica la aprobación del acto que vamos a sancionar. Sabe el pueblo argentino con qué detallada minuciosidad el actual Poder Ejecutivo ha expuesto durante estos seis últimos años ante el Congreso Nacional sus programas financieros y el uso que ha hecho de las autorizaciones legislativas. Sabe también el pueblo argentino con qué fiscalizadora atención el Congreso ha ejercitado el contralor de los actos del poder administrador, significando esta política cuentas claras y al alcance de quien se halla interesado por el manejo de los dineros del pueblo. Por eso, señor presidente, no podía faltar en esta oportunidad la aprobación del Poder Legislativo a este acto del Poder Ejecutivo, que al llevar implícitamente su legalización, le presta espontáneamente su adhesión y aplauso por tan acertada medida.

**Sr. Presidente** (Telsaire). — Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general el despacho.

—Se vota y resulta afirmativa.

—En particular es igualmente aprobado.

**Sr. Presidente** (Telsaire). — Quéda convertido en ley.

9

## MODIFICACION DE LA LEY DE IMPUESTO A LOS REDITOS

—Se lee:

### Despacho de comisión

Honorable Senado;

Vuestra Comisión de Presupuesto y Hacienda, ha considerado el proyecto de ley venido en

revisión de la Honorable Cámara de Diputados, modificando algunas leyes impositivas; y, por las razones que dará el miembro informante, os aconseja su aprobación.

De acuerdo con el artículo 100 del reglamento, este despacho pasa directamente al orden del día.

Sala de la comisión, 25 de septiembre de 1951.

Alberto Durand. — F. Daniel Mendiondo. — Pablo A. Ramella. — Ramón A. Roldán. — Armando G. Antille. — Mauricio A. Scatamacchia.

### Sanción de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación

(20 de septiembre de 1951)

### PROYECTO DE LEY

*El Senado y Cámara de Diputados, etc.*

### *Impuesto a los réditos*

Artículo 1º — Modifícase la ley del impuesto a los réditos en la forma que se indica a continuación:

- a) Lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 11 de la ley Nº 11.682, texto ordenado en 1947, modificado por la ley Nº 13.925, será de aplicación siempre que dentro de los 180 días del cierre del ejercicio los contribuyentes aporten los elementos que justifiquen, a juicio de la dirección, la menor utilidad obtenida. En caso contrario, entrará automáticamente a regir la presunción del 10 % contenida en el primer párrafo del artículo citado;
- b) Substitúyese el penúltimo párrafo del artículo 20 de la ley Nº 11.682, texto ordenado en 1947, modificado por la ley Nº 13.925, por el siguiente, que regirá para los réditos que se perciban a partir del 1º de enero de 1951:

«Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo anterior, los contribuyentes residentes en el país, que obtengan réditos comprendidos en el artículo 63, superiores a \$ 7.500 ó \$ 6.000 (según que tengan o no personas a su cargo), tendrán derecho a una deducción adicional igual al excedente de dichas sumas y hasta un máximo de \$ 12.600 anuales.»

- c) Agrégase al artículo 54 de la ley Nº 11.682, texto ordenado en 1947, el siguiente párrafo, que regirá para los ejercicios anuales iniciados a partir del 1º de enero de 1952:

«En el caso de que se distribuyan en concepto de utilidades o dividendos, bienes en especie —excepto acciones liberadas— la diferencia entre el valor corriente en plaza a la fecha de la distribución y su costo, se considera beneficio alcanzado por este impuesto o el de ganancias eventuales, según fuese la naturaleza de tales bienes. Dicha diferencia deberá incluirse en el balance impositivo de la sociedad correspondiente al ejercicio en que tenga lugar la distribución.»

- d) Extiéndese hasta el 31 de diciembre de 1955 la aplicación del decreto Nº 15.921 de 1946 (ratificado por ley Nº 12.922 y prorrogado por ley Nº 13.240) y de la ley Nº 13.243;
- e) Facúltase al Poder Ejecutivo para admitir, en el balance impositivo del impuesto a los réditos, amortizaciones extraordinarias sobre rubros del activo fijo —excepto inmuebles— con fines de reposición del equipo de explotación.

#### *Impuesto a los beneficios extraordinarios*

Art. 2º — Ampliase por el término de cuatro (4) años más la vigencia del impuesto a los beneficios extraordinarios, establecido por el decreto Nº 18.230/43 (texto modificado por decreto Nº 21.702/44) ratificado por ley Nº 12.922 y prorrogado por el decreto Nº 1.820/46 y las leyes Nos. 12.929 y 13.241.

#### *Impuesto a las ventas*

Art. 3º — Modifícase la ley del impuesto a las ventas en la forma que se indica a continuación:

- a) Agrégase al artículo 10 de la ley Nº 12.143, texto ordenado en 1947, el siguiente inciso:

«j) Las ventas efectuadas a las entidades de obra social y las que éstas realicen a sus afiliados, conforme a la reglamentación que establezca el Poder Ejecutivo.»

- b) Prorrógase por el término de tres (3) años más, la vigencia de la tasa del impuesto a las ventas sobre las operaciones de exportación, establecida por el decreto Nº 18.233/43 (ratificado por ley Nº 12.922) y prorrogada por las leyes Nos. 12.928 y 13.242 y por igual término prorrógase la vigencia de los aumentos de dicha tasa dispuestos por las leyes Nos. 13.343 y 13.478.

#### *Impuesto a la transmisión gratuita de bienes*

Art. 4º. — Será de aplicación para el impuesto a la transmisión gratuita de bienes lo dispues-

to en el artículo 39 de la ley 11.683, texto ordenado en 1949, a cuyo efecto, cuando se formalice la prórroga a que dicho artículo se refiere, dejará de exigirse el interés establecido por el artículo 15 de la ley 11.287, texto ordenado, y podrán ejercerse los actos de inscripción y disposición de bienes a que se refieren los artículos 16 y 17 de dicha ley.

#### *Impuesto substitutivo del gravamen a la transmisión gratuita de bienes aplicables a las sociedades de capital*

Art. 5º — Establécese con carácter transitorio, durante el término de diez (10) años, un gravamen substitutivo del impuesto a la transmisión gratuita de bienes que se aplicará en todo el territorio de la Nación a las sociedades de capital, con arreglo a las siguientes disposiciones:

- a) A los fines de este gravamen se consideran sociedades de capital, las que revisten tal carácter a los efectos del pago del impuesto a los réditos con excepción de las asociaciones civiles aludidas en el inciso c) del artículo 56 de la ley Nº 11.682, texto ordenado en 1947;
- b) El impuesto de la presente ley se determinará aplicando la tasa del uno por ciento (1 %) sobre el capital y reservas de las entidades alcanzadas por la misma.

A tal efecto se entiende por capital y reservas la diferencia entre el activo y el pasivo —excluido las inversiones en acciones de otras empresas y en bienes situados con carácter permanente en el exterior— ajustados conforme a las normas que rigen el impuesto a los beneficios extraordinarios y en la forma que establezca la reglamentación que dicte el Poder Ejecutivo;

- c) Las sociedades constituídas en el país deducirán del capital calculado de acuerdo con lo dispuesto en el inciso anterior, el importe de los dividendos que distribuyan, en efectivo o en especie —excepto acciones liberadas— dentro de los cinco meses del cierre del ejercicio.

Excepcionalmente, y cuando las circunstancias lo justifiquen, la Dirección General Impositiva admitirá dicha deducción, aun cuando la distribución se efectúe con posterioridad al vencimiento del plazo indicado;

- d) Las sociedades de economía mixta tributarán el impuesto en proporción al capital perteneciente a los accionistas privados y las sociedades en comandita por acciones, en proporción al capital accionario.

Las sociedades que emitan acciones nominativas podrán solicitar —dentro del plazo que fije el decreto reglamentario— que se las excluya del pago del impuesto de la presente ley en la proporción del capital representado por tales acciones a cuyo efecto deberán ajustarse a los requisitos que establezca el Poder Ejecutivo. En este supuesto no será de aplicación la norma contenida en el inciso f);

e) Este impuesto gravará los capitales resultantes de los diez balances anuales que se cierren a partir del 31 de diciembre de 1951. La reglamentación fijará el procedimiento a seguir para los casos en que no se efectúen balances anuales;

f) A partir del 31 de diciembre de 1951 no se computará el valor de las inversiones en acciones para determinar el monto imponible sujeto al impuesto a la transmisión gratuita de bienes. A ese efecto, se considerará como fecha de la transmisión, la del fallecimiento del causante o la de celebración del acto que la exteriorice, si se tratare de transmisión entre vivos.

Si al vencimiento del término fijado en el inciso anterior, no se prorrogare la vigencia de esta ley, deberá computarse el valor de las inversiones en acciones para la determinación del impuesto a la transmisión gratuita de bienes, considerando como pago a cuenta de éste la parte proporcional del presente gravamen que hubiese sido ingresado por la sociedad;

g) La aplicación, percepción y fiscalización de este gravamen estará a cargo de la Dirección General Impositiva. Las disposiciones de la ley Nº 11.683, texto ordenado en 1949 y sus complementarias rigen a los efectos de la presente ley, como así también supletoriamente y en lo pertinente, las normas del impuesto a los beneficios extraordinarios;

h) El producido de este impuesto se distribuirá entre la Nación y las provincias sobre la base del principio de la radicación económica de los bienes objeto del tributo.

No obstante y hasta tanto se reglamente el principio de la radicación económica, la distribución se efectuará en proporción al promedio de las recaudaciones registradas en cada jurisdicción en concepto de impuesto a la transmisión gratuita de bienes durante los años 1949 y 1950;

i) Las provincias quedarán obligadas a:

1º Derogar los gravámenes locales cualquiera sea su característica y denominación, que inciden directamente sobre la materia imponible a que se refiere esta ley, con prohibición de implantarlos en lo sucesivo;

2º Modificar el régimen de los impuestos locales a la transmisión gratuita de bienes a efectos de excluir a las inversiones en acciones en la determinación del haber sucesorio.

j) Deróganse el artículo 31 de la ley número 11.287, texto ordenado, el decreto Nº 6.755/43, ratificado por ley Nº 12.922, y las demás disposiciones que se opongan a la presente ley.

### *Impuestos internos*

Art. 6º — Modifícanse las leyes de impuestos internos en la forma que se indica a continuación:

a) Substitúyense, a partir del 1º de enero de 1952, los artículos 20 y 21 de la ley Nº 13.648, por los siguientes:

«Artículo 20. — Todo comercio o sección de comercio donde se venda, elabore o manufacture por cuenta propia artículos de joyería, relojería y afines, queda afectado al pago del impuesto a los objetos suntuarios que se aplicará, en las condiciones y con las excepciones que reglamentará el Poder Ejecutivo, sobre el monto anual de ventas de dichas mercaderías, o sobre el valor de las existencias de mercaderías —que podrá fijarse en el importe del seguro que las ampare— incrementado en un porcentaje de hasta el 100 por ciento.»

«Artículo 21. — Las tasas serán las siguientes: a) Importadores, mayoristas, fabricantes y talleristas: 2 %; b) Comercios de venta directa al público: 5 %. El impuesto mínimo por año fiscal será de \$ 1.000.»

b) Incurrirán en la penalidad del artículo 28 del texto ordenado de las leyes de impuestos internos los infractores a las disposiciones que dicte la Dirección General Impositiva;

c) Derógase el artículo 66 del texto ordenado de las leyes de impuestos internos

y agrégase al último párrafo del artículo 39 de dicho cuerpo legal la siguiente cláusula:

«En estos casos, el Poder Ejecutivo podrá autorizar que el ingreso del gravamen se realice dentro del tercer mes siguiente al del expendio de los artículos elaborados.»

#### *Impuesto de sellos*

Art. 7º — Agrégase al artículo 103 de la ley de sellos (texto ordenado en 1950) el siguiente inciso, que regirá a partir del 1º de junio de 1951:

«45. — Las asociaciones profesionales obreras con personalidad gremial y las sociedades cooperativas constituidas conforme a la ley 11.388 e inscritas como tales en el Ministerio de Industria y Comercio; así como los actos que se celebren para su constitución, registro, reconocimiento y disolución.»

#### *Derechos de aduana*

Art. 8º — Modifícase el artículo 6º, apartado 67, de la ley Nº 11.281 (texto ordenado) —liberación de derechos de importación al papel en bobinas o resmas, de cualquier índole o tipo destinado a la impresión de diarios, periódicos, libros, folletos y revistas, excluidos los de carácter comercial, siempre que se identifique su destino con la marca de agua—, en el sentido de que la exención alcanza también al papel utilizado en avisos comerciales publicados en ellos, dentro de las limitaciones que determine el Poder Ejecutivo.

Art. 9º — Condónanse todas las sumas adeudadas en concepto de impuesto del artículo 3º, inciso d), de la ley Nº 11.281 (texto ordenado) y multas que no hubieran sido ingresadas hasta la fecha de vigencia de la presente, aplicadas por haberse utilizado papel introducido en franquicia de derechos, en avisos de carácter comercial impresos en las publicaciones a que se refiere el artículo 8º.

Art. 10. — Las sumas abonadas con anterioridad a la fecha prevista en el artículo anterior o que a esa fecha se encuentren en gestión judicial para su cobro, se considerarán definitivamente ingresadas y no susceptibles de beneficiarse con la condonación prevista en el artículo 9º, de la presente ley.

#### *Impuesto a las ganancias eventuales*

Art. 11. — Incorpórase al artículo 4º, de la ley de impuesto a las ganancias eventuales,

texto ordenado en 1947, el siguiente inciso, que regirá a partir del 1º de enero de 1951:

«f) Los beneficios provenientes de la venta, cambio o permutas de títulos, acciones, debentures y demás valores mobiliarios.»

#### *Disposiciones generales*

Art. 12. — Autorízase al Poder Ejecutivo para fijar las tasas por actos ante el Registro de la Propiedad de la Capital Federal y territorios nacionales y para reglamentar el otorgamiento de las certificaciones a cargo del registro.

Art. 13. — Derógase el artículo 29 de la ley Nº 12.345 y el artículo 1º de la ley Nº 11.288, texto ordenado.

El producido del impuesto establecido por el artículo 50 de la ley Nº 12.360, texto definitivo, ingresará a rentas generales.

Art. 14. — Facúltase al Poder Ejecutivo a poner nuevamente en vigencia por el término de noventa (90) días los beneficios de la ley Nº 13.649, de condonación de multas por infracciones impositivas, con excepción de lo dispuesto en sus artículos 13, 14 y 15.

La exención de sanciones a que se refiere este artículo alcanza también a la contribución inmobiliaria.

Art. 15. — Destínase a la Fundación Eva Perón el producido de la contribución única a cargo de la ex Empresa Mixta Telefónica Argentina, establecida por la ley Nº 12.959.

Art. 16. — Comuníquese al Poder Ejecutivo.

**Sr. Presidente (Teisairé).** — En consideración.

**Sr. Durand.** — Pido la palabra.

El despacho de la Comisión de Presupuesto y Hacienda que tengo el honor de informar, se refiere a un proyecto de ley que nos ha enviado, en revisión, la Honorable Cámara de Diputados, por el que se introducen reformas a algunas leyes del régimen impositivo.

Los sistemas impositivos múltiples, como es el de nuestro país, además de las ventajas que sobre el sistema del impuesto único tiene, permite, dadas las continuas fluctuaciones a que deben enfrentarse las finanzas públicas en los actuales momentos, ir simultáneamente modificando procedimientos, atenuar incidencias gravosas o aumentando aquellas fuentes que permitan una mayor carga, en fin, adecuando el régimen, fuente de los recursos ordinarios que habrán de hacer frente al sostenimiento de la administración.

Por eso es que el Congreso, casi podría decirse que anualmente, se aboca al estudio



de los distintos gravámenes que integran nuestro sistema. La última reforma integral tuvimos oportunidad de considerarla en este recinto el año pasado, la que al ser aprobada por la otra rama legislativa tuvo sanción de ley bajo el número 13.925. Hoy podría repetir lo que expresé en aquella ocasión, pues las modificaciones que se proyectan a las distintas leyes de impuestos tienen un sentido verdaderamente racional y equitativo, tratando de aliviar las cargas que pesan sobre el sector de la población que cuenta con menores ingresos, imponiendo a cada una de sus prescripciones un sentido de verdadera justicia social y, en fin, desgravando a un importante sector de contribuyentes cuyos ingresos son a veces más el producto de su actividad personal que del modesto capital de que disponen.

Trataré de explicar a continuación cada una de las modificaciones que se proyectan a las distintas leyes de impuestos.

El artículo 1º contiene reformas a la ley 11.682, de impuesto a los réditos, a las que me he de referir separadamente.

En el artículo 11 de la ley de impuesto a los réditos, se presume que las agencias de noticias internacionales, que mediante una retribución las proporcionan a personas o entidades residentes en el país, obtienen réditos netos de fuente argentina, iguales al 10 % de la retribución bruta, tengan o no agencias o sucursal en la República. Y cuando presumiblemente la aplicación de este porcentaje dé lugar a resultados no acordes con la realidad, se faculta al Poder Ejecutivo a fijar porcentajes inferiores a este 10.

Este segundo párrafo es el que se modifica por el inciso a) con la finalidad de facilitar su aplicación, pues se establece un plazo de ciento ochenta días, a contar del cierre del ejercicio, para que las referidas agencias expongan los elementos que evidencien la menor utilidad obtenida. De no ser así, se aplicará lo dispuesto en el párrafo primero del artículo.

El artículo 20 de la ley de impuesto a los réditos, se refiere a la renta no imponible en las distintas categorías. La modificación que se le introduce al penúltimo párrafo de este artículo, consiste únicamente en el monto de la deducción adicional que efectúan los contribuyentes de la cuarta categoría, es decir, renta del trabajo personal. En la ley en vigor, es de \$ 5.400 anuales, y por la modificación se fija en 12.600 anuales, es decir, se eleva la deducción adicional en algo más del 42,85 por ciento.

Conviene destacar el significado de esta desgravación que se hace a la renta del trabajo personal, beneficiando especialmente a los contribuyentes de menores recursos, siguiendo de esta manera lo que ha sostenido nuestro ilustre líder, el excelentísimo señor presidente general

Perón, al decir: «El nuevo régimen impositivo, basado en el principio de la desgravación de las pequeñas rentas y el aumento de los gravámenes a las clases más pudientes, aparte de dar como resultado un considerable aumento en el cálculo de los recursos, cumple una alta función social, cual es la de contribuir a una más equitativa distribución de la riqueza, haciendo que las cargas sean soportadas por la población en proporción directa al *quantum* de sus bienes». Y la VI Conferencia de Ministros de Hacienda, en su preocupación por estudiar la modificación de los impuestos, con vistas a reducir o suprimir los que inciden, directa o indirectamente, sobre los sectores económicamente menos dotados de la población, recomendó que el Poder Ejecutivo, por conducto del Ministerio de Hacienda, propicie ante el Honorable Congreso una desgravación razonable de las rentas provenientes del trabajo personal, cuarta categoría, en materia de impuesto a los réditos.

Esta disposición traerá como resultado que muchos contribuyentes de pequeños recursos quedarán fuera del ámbito del impuesto y un crecido número se verán favorecidos con una rebaja apreciable en su contribución.

El artículo 54 de la ley 11.682, réditos de la tercera categoría, rentas del comercio, industria, etcétera, establece que cuando el contribuyente retire para su uso particular o de su familia o destine mercaderías de su negocio a actividades cuyos resultados no están alcanzados por el impuesto, se considerará que tales actos se realizan al precio que se obtiene en operaciones onerosas con terceros, y agrega que igual tratamiento corresponderá dispensar a las operaciones realizadas por una sociedad por cuenta de y a sus socios. El párrafo que se le agrega, suficientemente claro y que ahorra toda explicación, tiene por objeto evitar la evasión de gravámenes, como impuesto a los réditos, a los beneficios extraordinarios y a las ganancias eventuales que se produce con motivo de la distribución de bienes en especie, que en realidad tiene carácter de utilidades.

El decreto 15.921, de 1946, dispuso que a partir del 1º de enero de ese año, las personas de existencia física o jurídica podían deducir de las utilidades impositivas establecidas conforme con la ley de impuesto a los réditos, los importes que resultaren de aplicar los coeficientes que en el mismo decreto se incluían, siempre que el 30 % o más de dichas utilidades se afectaran durante el ejercicio al incremento de la capacidad productiva de las empresas, mediante la instalación de nuevas plantas, ampliación de las existentes o construcción de nuevas industrias manufactureras o de transformación. Definía, a este efecto, las industrias manufactureras o de transformación, y también

lo que se entiende por incremento de la capacidad productiva.

Esta disposición, que fué ratificada por ley 12.922, se dictó por un plazo de tres años, y al vencer ese término el Congreso, por ley 13.240, la prorrogó por otros tres ejercicios anuales cerrados a partir del 1º de enero de 1949.

En cuanto a la ley 13.243, no hizo ella más que extender la exención del impuesto a los réditos de determinadas utilidades invertidas en plantas industriales —que acabo de referir anteriormente—, a las explotaciones agrícolas, ganaderas, mineras y de pesca, y a las empresas que se dedicarán a transportes. Respecto a las explotaciones agrícolas, ganaderas se exceptúan los edificios destinados a administración, y en las mineras las que el código respectivo considera inmuebles, y en cuanto a las empresas de transportes sólo gozarán de este beneficio las construcciones realizadas en territorio argentino. Con relación a las adquisiciones de barcos y aviones, se entiende que hay incremento de capacidad productiva si esos elementos pertenecen a la matrícula nacional solamente. Esta ley, sancionada juntamente con la anterior, tiene el mismo término de vencimiento que ella.

Ahora bien, las razones que se tuvieron en 1948 para prorrogar el decreto 15.921, de 1946 y para sancionar la ley 13.243, es evidente que aun subsisten, pues tratándose de desgravar en parte aquellas industrias manufactureras o de transformación, como asimismo las industrias extractivas y empresas de transportes, no se hace más que contribuir a la mayor solidez financiera de estas empresas, y fomentar y estimular el incremento de la producción nacional, a la vez que, al fomentar la reinversión de los fondos que podrían distribuirse como utilidades, en la instalación de plantas productivas, se evita que esa masa de numerario se vuelque a la circulación, agravando así el proceso inflacionario.

La facultad que se le acuerda al Poder Ejecutivo para admitir en el balance impositivo del impuesto a los réditos, amortizaciones extraordinarias sobre rubros del activo fijo con fines de reposición del equipo de explotación, significa en parte un complemento de las finalidades que se persiguen con las disposiciones que acabo de explicar. Es sabido que en los activos de muchas empresas industriales figuran maquinarias cuya adquisición data de cinco o más años, es decir de épocas en que su valor de costo se hallaba muy por debajo del actual de reposición. En estos casos, como es natural, las amortizaciones ordinarias que se practican no guardan relación con el valor real actual de esos bienes, y en consecuencia el importe del activo fijo así constituido no traduce tampoco el verdadero monto que tiene.

En caso de que el contribuyente se vea ante la necesidad de reponer los bienes que necesita para su explotación, y que tiene que sujetarse a los coeficientes de amortización ya establecidos, se ve abocado a dificultades onerosas ante el aumento de los costos de reposición. De allí entonces que para facilitar el normal desenvolvimiento de estas empresas se hace necesario autorizar al Poder Ejecutivo para admitir amortizaciones extraordinarias, cuando ellas se hacen con la finalidad de reponer sus equipos de explotación.

Esta disposición traerá como consecuencia que el balance impositivo de las empresas se ajustará en sus reales cifras; las empresas podrán formar fondos de reposición que verdaderamente cumplan su función y finalmente estas sociedades se hallarán preparadas para hacer frente en cualquier momento sin sacrificios extraordinarios, destinadas a la reposición de su equipo industrial.

El decreto 18.230 del 31 de diciembre de 1943 estableció el llamado impuesto transitorio a los beneficios extraordinarios originados en el ejercicio del comercio, de la industria, de la minería, de la explotación agropecuaria y de cualquier otra actividad que importe la transformación o disposición habitual de bienes; este impuesto se fijó por el término de tres años.

Por decreto 21.702 del 18 de agosto de 1944 se suprimieron varios artículos y se modificaron otros del decreto antes citado. El decreto 1.820 del 19 de enero de 1946 prorrogó por un año más la vigencia de este impuesto. Todos estos decretos que acabo de enumerar fueron ratificados por el Congreso, según ley 12.922 del 21 de diciembre de 1946, y por ley 12.929 se prorrogó la vigencia de este gravamen por dos años más. Finalmente, la ley 13.241 del 2 de septiembre de 1948 prorrogó por tres años más la vigencia del impuesto a que me vengo refiriendo.

La prórroga de este gravamen por un plazo de cuatro años que dispone el artículo 2º del proyecto de ley que estamos considerando, obedece a que los motivos que se tuvieron en cuenta para su implantación existen aún en la actualidad, y en razón de que tanto su mecanismo como su incidencia se hallan ligados a otros impuestos, conviene que su vigencia subsista momentáneamente hasta tanto la situación general permita encarar el régimen impositivo desde un punto de vista integral.

Por el inciso a) del artículo 3º se agrega una exención más a las que existen al pago del impuesto a las ventas. Esta exención se refiere a las ventas efectuadas a las entidades de obra social y a las que éstas realicen a sus afiliados.

En realidad, parte de esta exención podría estar comprendida ya dentro del inciso d) del mismo artículo, que exceptúa de este gravamen



las ventas efectuadas por entidades de beneficio público que no persiguen fines lucrativos, pues si puede aceptarse que en las ventas que se realizan a entidades de ayuda social existe un lucro, por lo general él es mínimo, dado que en estos casos la entidad adquirente ajusta el precio de compra casi, puede afirmarse, hasta dejar límites mínimos de ganancia al vendedor. Y en cuanto a las ventas que realizan estas entidades a sus asociados, por lo común es con un margen no de lucro, sino sólo para cubrir sus gastos, dado su objeto.

También por el inciso c) de este artículo 10 están exentas del impuesto las ventas efectuadas a las cooperativas de consumo y las de las cooperativas de producción, como medida, ya se ha dicho, de que las mercaderías que estas entidades vendan a sus asociados lleguen al menor precio posible.

Como puede apreciarse, esta exención que se agrega a las existentes no hace más que reafirmar el sentido social de la desgravación impositiva que informa el presente proyecto de ley, en un todo de acuerdo con el sentido justicialista de la obra que realiza el gobierno peronista.

Me voy a referir al inciso b) del artículo 39. El decreto 18.233 del 31 de diciembre de 1943 estableció que el impuesto a las ventas para las operaciones de exportación fuese del 1,25 % a partir del 1º de enero siguiente y por el término de 3 años; y aplicaba una tasa del 3 ‰ a los responsables enumerados en el artículo 5º, inciso c) de la ley de impuesto a las ventas. Este decreto fué posteriormente ratificado por el Congreso, según ley 12.922. En diciembre de 1946, por ley 12.928, se prorrogó por el término de 2 años más la vigencia de la tasa establecida por el artículo 1º del decreto 18.233 de 1943 para las operaciones de exportación. Posteriormente, por ley 13.242 sancionada en 1948, se prorrogó por 3 años la vigencia de la tasa a que me vengo refiriendo. La ley 13.343 aumentó en tres unidades el impuesto a las ventas, y la ley 13.478 la aumentó en tres unidades y tres cuartos de unidad; ambas leyes dispusieron que para las operaciones de exportación se aplicara el aumento establecido por el término de tres años. Dadas las conveniencias de interés general para que se mantenga este gravamen del 1,25 %, como asimismo teniendo en cuenta la afectación especial a que los aumentos están destinados, como ser el Fondo de Previsión Social y la educación es que se estima indispensable prorrogar por tres años más la vigencia de este impuesto.

Por otra parte, las condiciones en que se desenvuelve actualmente el comercio internacional permiten absorber sin ningún inconveniente este tributo por parte del consumidor extranjero. Cabe agregar también que esta prórroga ha sido recomendada por la VI Conferencia de

Ministros de Hacienda, reunida este año en la Capital Federal.

El artículo 4º del proyecto de ley que estamos considerando se refiere a una cuestión de trámite de la ley de impuesto a la transmisión gratuita de bienes. El artículo 15 de esta ley trata del recargo o interés que se aplica cuando se demora en más de un año la iniciación de un juicio sucesorio; y los artículos 16 y 17 de la misma ley disponen que los jueces, escribanos y demás funcionarios intervinientes no darán curso a esos trámites sin el previo pago de ese recargo, que es del medio por ciento mensual o uno por ciento mensual, según la demora producida. La rigidez de estas disposiciones provoca frecuentemente que los derechohabientes se vean obligados a realizar bienes del haber sucesorio, no siempre en circunstancias adecuadas, a fin de hacer frente al pago del impuesto. Con el objeto de evitar estas situaciones es que se dispone aplicar para el impuesto a la transmisión gratuita de bienes lo que regla el artículo 39 de la ley 11.683, de procedimiento para la aplicación y percepción de impuestos, el cual autoriza a la Dirección Impositiva a conceder en casos especiales prórrogas para el pago de los gravámenes, recargos, intereses punitivos y penalidades, con garantía real o personal o sin ella, a un interés que no podrá bajar del 5 % anual.

El artículo 5º del proyecto de ley incluido en el despacho que estamos considerando establece con carácter transitorio, durante el término de diez años, un gravamen substitutivo del impuesto a la transmisión gratuita de bienes que se aplicará a las sociedades llamadas «de capital», con arreglo a una serie de disposiciones que se detallan en diez incisos. Como he dicho, el gravamen se establece por diez años, pero debe entenderse, tal como lo dice el inciso e), que comenzará a aplicarse a los balances que cierren el 31 de diciembre del año en curso inclusive.

No he de entrar a analizar cada una de esas disposiciones porque su texto es tan claro que difícilmente puede haber dualidad de criterio respecto a su interpretación, y sólo me he de referir en general al concepto que informa este nuevo tributo.

Hasta hace aproximadamente un año la individualización de los tenedores de acciones de las sociedades llamadas de capital era factible en razón de las disposiciones de la ley de impuesto a los réditos. Como recordarán los señores senadores, la ley 13.925, sancionada el año pasado, aprobó prácticamente el completo anonimato de los tenedores de acciones o títulos al portador, a fin de fomentar de esa manera la inversión de capitales en esa clase de sociedades comerciales e industriales. Pero esa medida, al impedir controlar la existencia de esos valores, ha posibilitado importantes evasiones al pago del impuesto a la transmisión gratuita de bienes, pues

en los casos de sucesiones en que el causante tenía en su haber sumas invertidas en títulos al portador, al haberse mantenido esos bienes en el anonimato, sus derechohabientes se los distribuían sin incluirlos en el haber sucesorio a fin de no oblar el tributo.

En la forma que se proyecta la aplicación del impuesto, no altera en nada las ventajas que se obtuvieron al mantenerse el anonimato, porque en realidad el gravamen no lo abonará el poseedor de acciones, sino la sociedad que las ha emitido.

Con respecto a la tasa, se ha establecido la del 1 por ciento sobre el capital y reservas de las entidades alcanzadas por la misma, que es ínfima en cuanto pueda afectar el normal desenvolvimiento de las sociedades que la tributarán; y tan cierto es lo que afirmo, que conociéndose públicamente desde hace más de una semana este nuevo gravamen, las transacciones de títulos registradas en la Bolsa durante ese lapso, lejos de producir una baja de valores si ello pudo haberlas perjudicado, se han mantenido firmes y con tendencia más bien a la suba.

Puede calcularse que este impuesto habrá de producir un importante recurso al fisco que hasta ahora injustamente se evadía. Además, contribuye al perfeccionamiento de nuestro sistema impositivo porque es de muy sencilla aplicación, fácil pago y bajo costo de recaudación y contralor.

En anteriores conferencias de ministros de Hacienda se ha venido esbozando la implantación de este tributo, y en la última realizada en el corriente año se concretó en una recomendación que incluía un mecanismo de aplicación muy similar al que contiene el artículo 5º de este proyecto de ley.

Según hemos podido informarnos, en otros países, como en la República Oriental del Uruguay, existe un impuesto similar al que estamos tratando, y que se implantó allí, precisamente, con la finalidad de evitar la evasión del gravamen a la transmisión gratuita de bienes.

El artículo 6º modifica el mecanismo del impuesto interno a los objetos suntuarios. El artículo 20 de la ley 13.648 establece que el impuesto interno a los objetos suntuarios se abonará aplicando la tasa del 20 % sobre el precio de venta al público; y a continuación enumera lo que la ley considera objetos suntuarios. Y el artículo 21 de la misma ley trata de las ventas entre inscritos y de las exenciones.

Este mecanismo ha dado lugar a un crecido número de reglamentaciones y de normas complementarias; que la autoridad encargada de aplicarlo se ha visto obligada a dictar, dada la diversidad de objetos motivo de la imposición y la variedad de ramos y negocios donde se realiza el comercio. Con todo, las autoridades se han visto ante dificultades imposibles de salvar, especialmente en lo que se refiere a la evasión del pago del gravamen, lo que no sólo consti-

tuía una burla a la ley, sino también una competencia desleal por parte de los que eluden el pago con respecto a los comerciantes que han cumplido regularmente ante el organismo recaudador.

La modificación proyectada substituye, como puede observarse, el mecanismo de aplicación del impuesto, el cual incidirá sobre el monto anual de ventas de los objetos suntuarios o sobre el valor de las existencias de mercaderías, incrementado en un porcentaje que podrá llegar hasta el 100 %. La tasa será del 2 % a los importadores, mayoristas, fabricantes y talleristas; y del 5 % a los comercios de venta directa al público. El impuesto mínimo por año fiscal será de \$ 1.000.

Es de observarse que en este caso la modificación tiende a perfeccionar el sistema impositivo, pues por su simplicidad se logra un régimen equitativo, que beneficia en todo sentido al que lo tributa y al fisco.

La disposición que se establece en el inciso b) de este artículo 6º tiende a llenar una sentida necesidad en el mecanismo de represión del incumplimiento de prescripciones relativas a las leyes de impuestos internos. En efecto, las reglamentaciones en vigor penan las infracciones a la ley y a los reglamentos que para su cumplimiento dictara el Poder Ejecutivo, pero se hallaba omitida la consiguiente penalidad a las transgresiones cometidas contra las instrucciones y disposiciones administrativas dictadas por la Dirección General Impositiva. Esta omisión queda salvada con la cláusula que se incorpora, evitándose así que comerciantes inescrupulosos puedan eludir el contralor legal que la ley ha querido delegar en esta repartición.

Voy a referirme al inciso c) del artículo 6º. El artículo 66 de la ley de impuestos internos tiene un significado exclusivamente de contralor reglamentario, pues establece que en el caso de exportación de alcohol de producción nacional, el exportador exigirá de la aduana un certificado con sus detalles y el cónsul argentino del lugar de importación le entregará otro documento con las mismas constancias, devolviéndose, contra entrega de estos documentos, una suma igual al impuesto abonado sobre el alcohol exportado, ya que el artículo 47 del texto ordenado de Impuestos Internos dice que los productos de fabricación nacional, gravados por esta ley, serán exceptuados de impuesto cuando se exporten.

Para simplificar todo este trámite es que se deroga el artículo 66, y al último párrafo del artículo 3º —que dispone que los fabricantes de artículos gravados que empleen como materia prima productos también gravados por este texto ordenado, podrán substituir al fabricante de éstos en la obligación de abonar los impuestos y retirarlos de la fábrica o depósito

fiscal mediante recibos provisionales cuyo conjunto se canjeará el 28 de cada mes por letras a 90 días de plazo—, a este último párrafo, repito, se le agrega el que introduce el proyecto, que dice que en estos casos, el Poder Ejecutivo podrá autorizar que el ingreso del gravamen se realice dentro del tercer mes siguiente al de expendio de los artículos elaborados.

De esta manera se agiliza y simplifica el procedimiento, facilitándose el pago, de manera tal que el industrial no se vea en la necesidad de congelar un monto de capital que pueda ser destinado a la mayor producción de bienes.

El artículo 7º agrega una exención más a la ley de impuestos de sellos, en favor de las asociaciones profesionales obreras con personalidad gremial y las sociedades cooperativas constituídas conforme a las disposiciones legales en vigor.

Este es un agregado que viene a aclarar y a definir categóricamente la exención que la ley quiere realizar en favor de estas entidades. Actualmente las cooperativas se hallan exentas en lo que se considera las operaciones de su funcionamiento interno, pero hasta cierto punto con un carácter restringido. Igual cosa ocurre con las cooperativas de crédito agrario, que gozan de exención en las operaciones que realizan con sus socios. También las mutualidades no pagan el impuesto de sellado en las cuestiones administrativas o judiciales. Las gestiones de obreros, empleados y asociaciones gremiales o sindicatos de trabajadores en actuaciones relacionadas con leyes de trabajo y previsión social, están exentas de sellado. Lo mismo los actos de constitución de asociaciones de beneficencia.

Lo que se quiere es que esta exención comprenda todos los actos que celebren estas entidades, sin retaceo de ninguna especie. Es una exención amplia que viene a substituir lo que actualmente se encuentre legislado y a extender sin excepción ninguna a todo lo que faltaba. Y no puede ser de otra manera, puesto que nuestra Constitución justicialista, al declarar como derecho especial del trabajador el de agremiarse libremente y de participar en otras actividades lícitas tendientes a la defensa de los intereses profesionales —lo cual constituye atribución esencial de los trabajadores, que la sociedad debe respetar y proteger, asegurando su libre ejercicio y reprimiendo todo acto que pueda dificultarlo o impedirlo—, al hacer esta declaración, repito, ella ha querido que las leyes faciliten su cumplimiento y barran con todo obstáculo que pudiese dificultarlo.

Las modificaciones que por los artículos 8º, 9º y 10 se proyectan al régimen aduanero, no creo que merezcan una detallada explicación, puesto que su texto es bien claro y de fácil interpretación. Se amplía el criterio de la liberación de derechos que existen para el papel, en el concepto de que la exención alcanza también

al papel utilizado para avisos publicados en las ediciones de los diarios. La condonación es expresa y concreta y las situaciones creadas o en gestión judicial no pueden ser motivo de interpretación distinta al contenido del artículo 10.

Por el artículo 11 se incorpora una exención más a las que contiene el artículo 4º de la ley de impuesto a las ganancias eventuales. Ella alcanza a los beneficios provenientes de la venta, cambio o permuta de títulos, acciones, debentures y demás valores mobiliarios. En realidad, la recaudación que se realiza por este concepto es ínfima, porque al ser de difícil verificación, quienes debían tributarlo eluden fácilmente su pago. Naturalmente que la exención comprende a las operaciones que circunstancialmente realiza el público, pero no alcanza a quienes hagan habitualidad de la negociación de estos valores.

La autorización que se le confiere al Poder Ejecutivo en el artículo 12 del proyecto, para fijar las tasas por actos ante el Registro de la Propiedad y para reglamentar el otorgamiento de las certificaciones a cargo del registro, tiene por objeto facilitar la corrección paulatina y adecuada de un sistema anticuado y poco ágil. Esta facultad permitirá implantar un sistema tarifario acorde con las necesidades y actividades del registro, y que redundará, sin duda, en beneficio del público en general.

Me voy a referir ahora al artículo 13 del proyecto de ley contenido en el despacho en consideración. El artículo 29 de la ley 12.345 grava el importe de las entradas de los espectáculos deportivos en que perticipen profesionales, de acuerdo a una escala. Su producido se destina a la construcción y mantenimiento de polígonos de tiro y al fomento de la práctica de los deportes. Pero con posterioridad a su sanción, la ley 12.965 liberó de este tributo a los clubes de fútbol y a otras entidades que organizaban espectáculos deportivos, de manera que el producido de este impuesto es ínfimo y de costosa fiscalización; por otra parte, las sumas que la Nación destina anualmente al fomento del deporte y las facilidades que se acuerdan para la construcción de esa clase de instalaciones, hace innecesaria la vigencia de este impuesto; de allí entonces, que su derogación no alterará mayormente el monto de los recursos y por el contrario significará un beneficio tanto para los que ingresaban este tributo como para el fisco.

El artículo 1º de la ley 11.288, de impuesto de patentes, también se deroga, en razón de que en virtud de disposiciones legales se dejó en suspenso en el distrito de la Capital Federal, a fin de que no se superpusiera al impuesto municipal a las actividades lucrativas. En los territorios nacionales siguió recaudándose, pero su monto, que no llega a dos millones de pesos anuales, debe distribuirse casi íntegramente entre las municipalidades y comisiones de fomento locales. Y como a estas municipalidades se les

ha facultado para imponer los mismos impuestos que se aplicará en la Capital Federal, resulta evidente la necesidad de derogar esta disposición impositiva por razones de técnica tributaria y racionalización administrativa.

La última parte del artículo que comento dispone que el impuesto establecido por el artículo 50 de la ley 12.360, ingresará a rentas generales. Esta disposición tiende a dejar expresamente aclarado que en la derogación del artículo 1º de la ley 11.288, en cuanto ella se refiere a las patentes comerciales e industriales, no se hallan comprendidas las patentes a los prestamistas.

El artículo 14 fué incluido en la discusión en particular de este proyecto de ley en la Honorable Cámara de Diputados. Como se ve, se trata de poner en vigor por un plazo de noventa días los beneficios de la ley 13.649, de condonación de multas por infracciones impositivas, con excepción de sus artículos 13, 14 y 15, y extendiéndola también a las multas por infracciones a la contribución inmobiliaria. No cabe argumentar mayormente para apoyar esta disposición que beneficia a un crecido número de contribuyentes. Como dato ilustrativo, dado ya también al proponerse esta condonación en la otra Cámara, diré que como efecto de la condonación dispuesta por la ley 13.649, ingresaron al fisco más de \$ 100.000.000. Aparte de esto, no es una razón menos valedera la de que permitirá regularizar su situación con el fisco a millares de contribuyentes, unos actualmente en discusión con el fisco y otros, posiblemente los más, que aprovecharán esta ocasión para presentarse a las oficinas recaudadoras a oblar su tributo sin multa, que de otra manera quizá se mantendrían en el anonimato porque como bien se sabe, la fiscalización nunca llega a ser perfecta. Por eso es que la comisión, por mi intermedio, presta decididamente su apoyo a la sanción de este artículo.

El último artículo del proyecto de ley que estamos considerando destina a la Fundación Eva Perón el producido de la contribución única a cargo de la ex Empresa Mixta Telefónica Argentina, que le impuso la ley 12.959. Esta ley fijó el sistema impositivo de esta empresa, imponiéndole como contribución única una suma igual al 2 % de las entradas brutas de la explotación del servicio que correspondan a la empresa. Este impuesto substituyó a todo otro gravamen nacional, provincial o municipal creado o por crearse, y toda otra contribución, retribución o tasa nacional, provincial o municipal. Los fondos que así han quedado recaudados ascienden a algo más de dos millones y medio de pesos, los cuales no han podido ser distribuidos entre la Nación, las provincias y las municipalidades en virtud de no existir una disposición legal que fije el régimen de distribución. La VI Conferencia de Ministros de Hacienda votó una recomendación para que se propicie la entrega

de estos fondos a la Fundación. Y los autores de este proyecto de ley en la otra Cámara, recogiendo la idea, incluyeron en su texto la transferencia de que acabo de informar.

Nada más concordante con lo que estableció la ley 12.959 habrá de resultar si el importe recaudado se le entrega a la Fundación Eva Perón, pues, como es sabido, esta prestigiosa entidad de ayuda social vuelca su acción benefactora en todos los ámbitos del país. Así, pues, si la ley quiso que se distribuyese ese importe entre la Nación, las provincias y municipalidades, nada mejor que por esta vía llegará a esos destinos para consolar al afligido, atender al enfermo, proteger al desvalido y amparar a la niñez, de manera que hará bien el Congreso al disponer esa transferencia a la Fundación para que su inspiradora, creadora y directora, ejemplo de mujer consagrada a una causa noble y generosa, pueda seguir ejerciendo ese apostolado que los pueblos del mundo glorifican y la historia habrá de consagrar.

**Varios señores senadores.** — ¡Muy bien!

**Sr. Presidente (Teisaire).** — Se va a votar en general el despacho de la comisión.

—Se vota y resulta afirmativa.

**Sr. Presidente (Teisaire).** — En consideración en particular.

**Sr. Giavarini.** — Pido la palabra.

Hago moción en el sentido de que se enuncien solamente los artículos del proyecto, y los que no sean observados, se den por aprobados.

—Apoyado.

**Sr. Presidente (Teisaire).** — Se va a votar la moción formulada por el señor senador por Santa Fe.

—Se vota y resulta afirmativa.

—Sin observación, se enuncian y aprueban los artículos 1º al 15.

—El artículo 16 es de forma.

**Sr. Presidente (Teisaire).** — Queda convertido en ley.

10

**TRABAJO ENCOMENDADO AL HISTORIADOR DARDO CORVALAN MENDILAHARZU, AD HONOREM, RELATIVO A LA PUBLICACION DE LOS ESCUDOS DE LAS PROVINCIAS ARGENTINAS, DE LA NACION Y DE SU CAPITAL FEDERAL**

—Se lee nuevamente el proyecto de decreto que figura en el número 4 del sumario.

**Sr. Presidente (Teisaire).** — En consideración.

**Sr. Madariaga.** — Pido la palabra.

Señor presidente: considero que está suficientemente claro el objeto del decreto del Hono-